

Petróleo y corrupción

¿Podrá Maduro abatir el flagelo de los grandes negociados? No hay poderes públicos independientes que controlen el uso del dinero que ingresa por renta petrolera

ISAAC MENCÍA



Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2012 elaborado por Transparencia Internacional, organización no gubernamental líder dedicada exclusivamente a la lucha contra la corrupción alrededor del mundo, Venezuela es uno de los países más corruptos al ocupar conjuntamente con Haití el lugar N° 165 de una muestra de 174 países, siendo apenas superado por Irak, Turkmenistán, Myanmar, Sudán, Afganistán, Corea del Norte y Somalia.

En opinión de esta ONG "la mayoría de las naciones productoras de petróleo son más propensas a mayores niveles de corrupción" (Informe 2004). Esta observación no luce descabellada.

Una posible explicación a esta propensión es que en las naciones donde la principal fuente de ingresos proviene de la producción y exportación de hidrocarburos, el Estado y su élite gobernante no dependen de la creación de riqueza por parte de sus ciudadanos y del consiguiente pago de impuestos para financiar el funcionamiento de la administración pública, de donde ponerle la mano al "botín petrolero" y mantenerlo constituye un incentivo sin sustituto para todo tipo de oportunistas y trepadores que ven en el Petro-Estado la forma más segura, fácil y lucrativa de enriquecerse.

Esta es una de las razones por las cuales en los Petro-Estados las élites políticas, especialmente las que carecen de valores y convicciones democráticas, suelen no tener incentivos para crear y hacer funcionar una fuerte institucionalidad con poderes públicos independientes que controlen el uso de los dineros provenientes de la renta petrolera.

De allí que mientras más opaca o menos transparente sea la gestión pública y mientras más discrecional el manejo de los recursos públicos en general, mayores serán los incentivos para hacer de la corrupción la conducta cotidiana de los gobernantes, pues la impunidad está garantizada.

BONANZA SIN PRECEDENTES

En el caso de Venezuela, durante los últimos 15 años se crearon todas las condiciones e incentivos para que floreciera y se extendiera en todos los espacios del Estado las más variadas y profundas prácticas de corrupción: una bonanza petrolera sin precedente que puso en manos del gobierno el manejo de más de 700 mil millones de dólares; un manejo absolutamente discrecional de los dineros públicos sin transparencia ni rendición clara de cuentas, un ejemplo de ello es el Fonden y Bandes que funcionan como finanzas paralelas; la asignación de contratos de obras públicas y de compra de bienes a gobiernos y empresas extranjeras sin licitación internacional; la aprobación de un sistema de control de cambio durante más de 10 años que ha creado toda suerte de incentivos para hacer grandes negociados como lo demuestra la confesión del ministro Giordani de que en el 2012 se asignaron más de 20 mil millones de dólares a "empresas de maletín", y lo más grave aún, la falta de independencia de los poderes públicos para controlar y juzgar la gestión del gobierno.

Mientras persista este diseño institucional será imposible combatir de verdad, verdad, la corrupción, porque la impunidad es un poderoso aliciente para saquear la hacienda pública.

Nicolás Maduro, para sorpresa de muchos, ha levantado la bandera de la lucha contra la corrupción reconociendo que este es un flagelo presente en el cuerpo de la revolución bolivariana. El reto que tiene por delante es descomunal: convencer a los venezolanos con hechos concretos y relevantes que está combatiendo de manera eficaz y sincera la corrupción. Los escándalos que involucran a altos jerarcas de la revolución bolivariana abundan.

Las denuncias documentadas por los diputados de la Causa R, Andrés Velásquez y Américo de Grazia, sobre robo de dinero público en el estado Bolívar, y las de Edgardo Mata sobre Cadivi y el Sitme, ponen a prueba, entre otras, la determinación de Maduro de luchar contra la corrupción sin discriminar la jerarquía política y posiciones de poder dentro del Estado-Gobierno de los involucrados.

CONTRALORÍA

Si Maduro quiere combatir la corrupción más allá de las palabras debe adoptar dos decisiones fundamentales: apoyar la designación de un Contralor (a) General de la República independiente y autónomo que controle y audite el uso de los fondos públicos, y no hacer un uso abusivo y ventajista del dinero y los bienes del Estado en las campañas electorales a favor del oficialismo.